

# El Salvador proceso

informativo semanal

año 17  
número 733

noviembre 6  
1996  
ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- Elecciones cuestionadas
- Situación de la industria maquilera
- Los medios y la difusión de la violencia
- Evaluación de la Integración  
Centroamericana
- Los retos para combatir la violencia
- ¿Quién le cree a la PNC?

## Los retos para combatir la violencia

A juzgar por las informaciones de la prensa nacional y por las declaraciones de los políticos, las autoridades públicas y los líderes de opinión pública, pareciera que nadie, o al menos muy poca gente en este país, sabe qué hacer con el problema de la violencia. Esto es especialmente cierto en el caso del gobierno cuya Cruzada Nacional contra la Delincuencia y sus acciones en dirección de aprobar la pena de muerte y de endurecer las leyes en contra de los delincuentes constituyen las únicas medidas, o al menos las más visibles, diseñadas para contrarrestar la violencia. Sin embargo, ni el gobierno ni aquéllos que escribiendo o criticando en los espacios de opinión afirman que lo que hace falta a nuestra sociedad es "recuperar los valores perdidos", han dedicado tiempo a un estudio sistemático del problema de la violencia en El Salvador. Más bien, la mayoría de cosas que se proponen públicamente parten del sentido común más olímpico, muchas veces impregnado por un revanchismo social al estilo del "ojo por ojo" y sin mayores razones que las de acabar con todo lo que pudiera resultar peligroso.

Es impresionante encontrar cómo aún después de cuatro años de que los salvadoreños comenzaran a señalar crecientemente el problema de la violencia, no existen siquiera registros fiables y sistemáticos sobre la prevalencia de la violencia y los delitos, ya no se diga estudios o investigaciones epidemiológicas o sencillamente de magnitud de la violencia. Y más impresionante aún es la facilidad con la cual se promulgan decretos —que son presentados como parte de un plan— sin ninguna base comprobada y sin proyecciones de consecuencias.

En estas condiciones es necesario recordar y subrayar —por enésima vez— que el problema de la violencia en el país no se reduce a la cantidad de personas asaltadas a lo largo del territorio nacional; el problema de la violencia tiene que ver con un estado de agresividad exacerbada que permea todos los ámbitos sociales de la vida nacional y cuyas expresiones más terribles se están convirtiendo en algo habitual, tanto como cotidiana sigue siendo la muerte en esta sociedad.

Por ello, el combate de la violencia debe partir de acciones sistemáticas, planificadas y

controladas, no de expresiones de buenos deseos o "buenos valores". El primer reto, ya impostergable, para combatir la violencia en este país lo constituye, como ya se ha señalado en este semanario, la implementación de estudios exhaustivos sobre la violencia y sus manifestaciones. Ello implica la creación de instrumentos eficientes de seguimiento epidemiológico, de identificación de los factores de riesgo para cada zona geográfica del país y de los entornos urbanos; implica también un examen riguroso de los registros de violencia de tal manera que permita su validación y estandarización bajo criterios e indicadores medibles; el estudio de la violencia significa también una estimación de los recursos y programas que efectivamente se invierten en el combate de la violencia misma, lo que gastan los salvadoreños de manera pública o privada en protegerse y cuánto de eso es realmente efectivo para detener la violencia y cuánto de eso en realidad sólo contribuye a subir un escalón más en la espiral de agresiones sociales. Un estudio sistemático sobre el problema permitiría vislumbrar qué zonas del país necesitan una atención más eficiente en términos de recursos de protección y de seguridad pública y qué tipos de recursos con los más adecuados para cada zona. Por ejemplo, una investigación objetiva sobre un programa de combate a la delincuencia probablemente señalaría el índice de efectividad de los números telefónicos para denuncias en un país con un 80 por ciento de la población sin teléfono. Asimismo, señalaría la conveniencia de destinar recursos para la protección de la población en una zona plagada de masacres antes que destinarlos para proteger cosechas agrícolas.

La importancia de estudiar el problema se fundamenta en su potencial para la definición de políticas efectivas en contra de la violencia y constituye un reto primordial en una sociedad que no ha logrado comprender a la paz como un estilo de vida a todo nivel, no sólo político. Sin embargo, esperar a cumplir con el primer reto no puede justificar la falta de acciones más coherentes para atacar la violencia. Los estudios realizados en otros lugares señalan una serie de aspectos que usualmente están asociados a la violencia dentro de una sociedad. Un examen rápido —pero no menos riguroso—

sugiere que tales aspectos están presentes también en el fenómeno salvadoreño. Estos son: un sistema de marcada marginación y exclusión social, un entorno psicosocial que posibilita la agresión, la falta de eficiencia en los sistemas de seguridad pública y justicia, la permisividad hacia el uso y portación de armas, y el elevado consumo de alcohol y drogas. Así, los retos para combatir la violencia se deberían encaminar hacia la atención de esos aspectos bajo una visión integral.

La violencia no se combate reduciendo la pobreza **per se**, mucho menos se combate confinando o eliminando a los pobres; la violencia se enfrenta reduciendo la marginación social de las mayorías. La violencia se combate en la medida en que la sociedad abre espacios de participación legal y legítima que permitan a los ciudadanos tener un control aceptable sobre su entorno y sobre su destino social. Ciertamente la marginación está ligada a la pobreza, pero está comprobado que la violencia como la que vive el país en la actualidad, no surge como un intento de obtener recursos financieros para vivir, sino como un intento de recuperar espacios de poder social que permitan tener cierto nivel de control sobre la vida y que de otra forma no se obtendrían. Este es un gran reto, el cual está ligado a la tarea de que los salvadoreños "des-aprehendan" que el uso de la violencia es efectivo para resolver conflictos y para lograr sus metas. Ello está ligado al problema de la salud psicosocial de la población: un entorno injusto que excluye a muchos y que beneficia a pocos genera mecanismos ideológicos de descalificación que mutila, que deshabilita a las mayorías para poder sostenerse.

El siguiente reto es, entonces, re-habilitar psicosocialmente a la población, no en el sentido de terapia ocupacional sino en el sentido de devolverle su valor como personas con derechos, intereses y necesidades propias que deben ser satisfechas desde la base. En esto participa también las posibilidades de justicia en la sociedad. Ante todo, es necesario erradicar la impunidad de los sistemas de seguridad pública y de justicia. Todos los ciudadanos deben tener en la práctica los mismos derechos y el Estado debe garantizar eso por todos los medios, más aún con los débiles y desposeídos. Es ilusorio pensar que medidas como la pena de muerte van a ser efectivas en

combatir la delincuencia si el sistema no es capaz de atrapar a los que cometen los delitos más graves en contra de la sociedad; en estas condiciones el Estado terminará matando sólo a los que puede agarrar quienes son los que cometieron los delitos menores y que tienen menos recursos para evadir el sistema.

Los anteriores son los retos estructurales —puestos de manera simple—, pero existen otra serie de aspectos que hay que enfrentar y son fundamentales en la lucha contra la violencia. Estos elementos son quizás más tangibles de abordar, pero no dejan de ser temas duros. En primer lugar, hay que despojar a los civiles del armamento. Es ridículo que mientras se desarrolla una campaña de recolección de armas de fuego a través de un intercambio, se estén instalando nuevas armerías para proveer a la gente de recursos de armamento en buenas condiciones. Al final se está creando un círculo de reciclaje de armamento del que sólo se benefician los comerciantes, pues las armas terminan regresando a aquéllos que las quieren usar. Un país que ha vivido bajo distintos tipos de violencia durante más de dos décadas y que le ha costado más de cien mil muertes no puede darse el lujo de seguir alimentando los odios con los instrumentos para consumir muertes. En segundo lugar, se deben imponer controles sobre el consumo de alcohol y estupefacientes. La totalidad de investigaciones sobre violencia han demostrado la estrecha relación entre agresión y dopaje; las informaciones locales sobre las circunstancias que han rodeado a las recientes masacres señalan también la presencia del alcohol entre los agresores. Contrario a la tendencia internacional de controlar el consumo de alcohol y drogas mediante impuestos, vedas al consumo en lugares públicos o venta libre, en El Salvador se debe enfrentar una rebaja a los impuestos de las bebidas alcohólicas y la venta casi sin restricciones de las mismas. No se puede combatir la violencia con una combinación tan explosiva como armas y alcohol.

En cualquier caso, los retos para combatir la violencia son grandes y complejos, pero el problema exige que las acciones sean tomadas de manera integral y cuidadosa. Ante todo, es básico comprender todas las facetas del problema y abordarlo desde esa integralidad.